



El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, saluda a los habitantes del barrio Alemao en Río de Janeiro durante la inauguración de casas para las víctimas del alud del 25 de octubre de 2010.

# EL LULISMO CONTRA LAS CUERDAS

**André Singer.**

Periodista, politólogo y docente de la Universidad de San Pablo. Fue secretario de Prensa de la Presidencia de Brasil de 2003 a 2007.

***Después de una década virtuosa, una marcha rooseveltiana pierde el rumbo y llega al final del año 2015 cerca del colapso.***

En las vísperas de la primera elección de la presidenta Dilma Rousseff, sugerí comparar el ciclo lulista con el del *New Deal* articulado por Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933 y vigente, de algún modo, en Estados Unidos hasta alrededor de 1968. En los meses posteriores a la elección de 2010, circulaba un libro del Premio Nobel de Economía Paul Krugman (*La Consciencia de un Liberal*) con un relato inspirador sobre aspectos de la experiencia estadounidense. Durante casi tres décadas, el éxito rooseveltiano determinó que hubiese empleo para la mayoría y aumentos salariales constantes. La promoción de igualdad llevó a un gran sector de los habitantes “a una vida

material fehacientemente decente y similar”. En 1966, un 80 por ciento de la población estadounidense tenía seguro de salud, un porcentaje que era de apenas el 30 por ciento al final de la Segunda Guerra.

Nunca imaginé que un proceso inaugurado por Luiz Inácio Lula da Silva pudiese producir efectos tan fuertes. Quien tenga la paciencia para consultar *Os Sentidos do Lulismo* en su versión original, una tesis escrita a comienzos del año 2011, verá que llamo *reformismo débil* al estilo homeopático de cambios propiciados por el ex-metalúrgico. Aplicado a un país de desigualdades abismales como Brasil, no tendría el resultado sintético visto



Luiz Inacio Lula da Silva levanta sus manos cubiertas de petróleo durante la ceremonia en Petrobras 50, una plataforma flotante de extracción, en Campos Basin el 21 de abril de 2006.

Estados Unidos. Pero si continuase durante el tiempo extendido de los realineamientos electorales estadounidenses, podría, después de algunas décadas, resultar en la integración de gran parte del subproletariado brasileño al estado mínimamente civilizado que las clases intermedias habían alcanzado, dejando de lado el problema original de la inorganicidad del sector sustantivo de la sociedad brasileña. El subproletariado es la franja de la clase trabajadora -nada que ver con el lumpenproletariado- que está por debajo de las condiciones mínimas de renta y derechos que le permitiría participar de la lucha de clases. Dicho de manera más clara, el subproletariado brasileño abarca el vasto contingente que trabaja en la informalidad con rentabilidades familiares mensuales que están por debajo de dos salarios mínimos.

Hasta el domingo 26 de octubre de 2014, a pesar de los percances, la realidad respaldó la idea presentada aquí.

Volvamos un poco atrás en el tiempo. En 2010, Brasil crecía a 7,5 por ciento; el desempleo, que era de 10,5 por ciento en 2002, había

caído a 5,3 por ciento; y el salario mínimo era 54 por ciento superior al registrado al final de la era de Fernando Henrique Cardoso. Con una tasa de empleo que se incrementaba, los trabajadores que tenían el carné laboral firmado obtenían ganancias reales en casi todos los contratos colectivos. Los viajes en avión, el tratamiento dental, un automóvil y el diploma universitario se volvían accesibles para los grupos populares. La casa propia, aún cuando su calidad y localización fueran dudosas, estaba al alcance de quienes tenían una renta bajísima. El ex operario dejaba la presidencia con el 80 por ciento de aprobación.

Electa en ese clima de euforia, Dilma aprovechó la buena onda para acelerar su paso. Redujo los intereses, disminuyó la cuenta de luz y realizó varias tareas ministeriales republicanas. La bolsa de trabajo llamada *Familia* fue ampliada en cuanto a su alcance y valor. Al final de su mandato inaugural, los programas importantes para la integración social, como el *Prouni* y el *Minha Casa Minha Vida*, habían incorporado más usuarios y, a pesar de la desaceleración capitalista global, el empleo y la renta no sólo se preservaron, sino que continuaron creciendo.

La desocupación había caído a 4,3 por ciento en diciembre 2014 y, con ganancias anuales de entre 1,5 y 4,1 por ciento, las gestiones de Lula y Dilma acabarían por propiciar un incremento total de más del 30 por ciento en el poder adquisitivo de los empleados. El salario mínimo había acumulado un valor real del 72 por ciento entre 2002 y 2014. Finalmente, una sociedad continuaba en el camino de la dirección rooseveltiana y todos, opositores y partidarios, lo sentían.

Fue gracias a los avances rooseveltianos que quien continuó con el lulismo obtuvo una ajustada reelección en 2014. Al día siguiente de la victoria, sin embargo, comenzó una caída, que puede convertirse en fracaso: los periódicos anunciaban que la presidenta reelecta buscaba en el mercado financiero al nuevo comandante de la economía, lo que significaba, como mínimo, suspender el camino que ella había prometido seguir. Después de cuatro semanas de una duda torturante, el jueves 27 de noviembre de 2014, una frase de doce palabras comunicaba que la presidenta había decidido rendirse al plan de austeridad, entregando el Ministerio de Hacienda a Joaquim Levy.

Como un boxeador que, de repente, pierde las defensas, en 2015 el lulismo comenzó a recibir golpes durísimos y continuos, casi sin reacción. Apenas intentaba recuperarse de un golpe, recibía otro más fuerte. La debacle del lulismo no se reduce al aspecto económico. Los golpes ideológicos, jurídicos y políticos fueron tan importantes como los económicos. Pero, como la base material estaba oculta, es como si los ataques fuesen potenciados y las respuestas, anuladas. Después de doce meses de gobierno contra las cuerdas, el Tribunal de Cuentas de la Unión condenó las cuentas de Dilma relacionadas con 2014 bajo los cargos de “pedaleadas fiscales”. El cuerpo del luchador cayó al suelo y sólo pudo levantarse, mareado, después de que el árbitro había comenzado el recuento y fuera interrumpido por el gong.

Debilitado, el boxeador intenta ahora prepararse para los obstáculos de 2016. Con el producto bruto interno disminuido en un 3 por ciento, una inflación de alrededor del 10

por ciento, una tasa de desempleo que se incrementó en 80 por ciento desde diciembre de 2014, el salario real medio en caída (con 7 por ciento menos que en octubre 2014), metalúrgicas, peluqueros y hasta aquellas con título en publicidad buscando empleo como empleadas domésticas, la reacción eufórica antilulista, la operación *Lava Jato* en pleno auge, una base partidaria lulista rasgada y una próxima elección municipal complicadísima, con todo eso el nuevo año será tan agónico como lo que se termina, pudiendo, de hecho, sellar el fin del sueño rooseveltiano.

“  
**Después de doce meses de gobierno contra las cuerdas, el Tribunal de Cuentas de la Unión condenó las cuentas de Dilma relacionadas con 2014 bajo los cargos de “pedaleadas fiscales”**  
 ”

¿Cómo se formó el *tsunami* que hizo que el lulismo se hunda? La respuesta implica considerar múltiples factores, algunos estructurales, otros conyunturales. En la combinación se mezclaron el cambio de la fase de la economía mundial, una orientación audaz, pero poco sustentable, adoptada por Dilma en la economía y en la política durante el primer mandato, la campaña equivocada de 2014, una atracción del centro posmaterialista de clase media por parte de la derecha, el éxito de la Operación *Manos Limpias* a la brasileña y el ascenso parlamentario de un Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) atípico.

El texto que sigue intenta ordenar la mezcla de elementos dispares. Son pinceladas sobre un cuadro cuyo verdadero trazado, posiblemente, sólo será realizado en el futuro. La riqueza e importancia de los acontecimientos de 2015 justifican, mientras tanto, una reflexión en caliente. El período condensó contradicciones tan expresivas de los impases brasileños que merecería un libro al respecto.

Comencemos por las bases económicas, cuya desestabilización hizo temblar al



edificio entero. Los cálculos hechos en el año 2010 mostraban que, para continuar con las reformas graduales, era preciso que el PBI creciese cerca del 5 por ciento anual. Ante el recrudecer de la crisis financiera internacional en 2011, que redujo de manera sustantiva el ritmo globalizado, Dilma puso en práctica lo que Guido Mantega llamó “nueva matriz económica”. Se trataba, en realidad, del osado ensayo desarrollista en un momento adverso, ya que la segunda fase de mega dificultades capitalistas puso en marcha una ofensiva neoliberal en el mundo entero. Aquí, la intención de la presidenta era aprovechar el mal momento global para resolver problemas estructurales de la economía brasileña. En un artículo publicado en el calor del momento, el ex ministro Luiz Carlos Bresser Pereira fue uno de los pocos en percibir el tamaño de la tarea. “Dilma -escribió el profesor de la Fundación Getulio Vargas, de São Paulo- ciertamente piensa liderar un proyecto nacional con amplio apoyo de la sociedad” y tiene la disposición para enfrentar los problemas imposibles de la situación nacional: “el conjunto de la alta tasa de interés y del cambio sobrevalorado”.

Para hacer un buen trabajo, de hecho, Dilma hizo uso de un intenso activismo estatal. Fueron cientos, tal vez miles, de acciones promovidas por el poder público. Entre ellas, el *Plan Brasil Mayor*, una política industrial lanzada en agosto de 2011, con 287 medidas previas en la versión original, después complementadas por otras tantas. La devaluación del real, el control de capitales, la exoneración, la protección al producto nacional, las concesiones reguladas para la infraestructura, el uso intensivo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para sustentar la inversión, etcétera. La lista es larga y variada. Para resumir, fijemos la atención en dos de esas acciones: la reducción de tasas de interés y la reforma del sector eléctrico.

Presentada como cambio “estructural” y “fundamental” por Mantega, “la colocación de tasas de interés a nivel normales para una economía sólida y con un riesgo bajo” fue la lucha principal de la nueva matriz. El Banco Central redujo la tasa básica de

interés del 12,5 a 7,25 por ciento anual entre agosto de 2011 y abril de 2013, y la Selic (tasa de préstamos interbancarios) alcanzó el valor más bajo desde su creación en 1986. Considerando la inflación del 6,59 por ciento acumulada en doce meses, el interés real llegó a menos de 1 por ciento por año (0,619 por ciento, precisamente) al final del ciclo. De ser campeón mundial, Brasil pasó a tener niveles de interés compatibles con los aplicados en los centros capitalistas más avanzados. Después, para normalizar el costo del crédito, el Ejecutivo presionó a los bancos privados para bajar los correspondientes *spreads*, el adicional de riesgo cobrado en el mercado financiero.

“  
**“No se puede admitir que Brasil, que tiene uno de los dos sistemas financieros más sólidos y lucrativos, continúe con uno de los dos intereses más altos del mundo”, aseguró Dilma.**  
 ”

No satisfecha con el enfrentamiento al núcleo duro del capital, la presidenta decidió politizar el tema, algo que siempre estuvo fuera del guión lulista. Durante la noche del 30 de abril de 2012, un discurso tradicional a los trabajadores en ocasión del Primero de Mayo tuvo un sabor diferente. En lugar de mostrar un menú algo insulso de avances lentos sin confrontación política, la primera mandataria ofreció al público un plato picante. Dilma dedicó el discurso para atacar a los bancos. “No se puede admitir que Brasil, que tiene uno de los dos sistemas financieros más sólidos y lucrativos, continúe con uno de los dos intereses más altos del mundo”, aseguró a través de la red nacional de radio y televisión. De lo alto del 64 por ciento de aprobación de que disponía entonces (óptimo/bueno en el Datafolha del 18 y 19 de abril de 2012), concluyó: “No vamos a desistir de cobrar con firmeza de quien quiera que cumpla con su deber”. En ese caso, el deber era la reducción de los intereses para garantizar el crecimiento de la economía. El gesto presidencial funcionaba como la punta del iceberg de la guerra

desarrollista, centrada en aquel momento en la “batalla del *spread*”, una tasa adicional de riesgo cobrada en el mercado financiero, una etapa decisiva de conflagración.

Siguieron meses de enfrentamiento. En mayo, la presidenta modificó las reglas de remuneración del ahorro, para permitir que el Banco Central continuara con la reducción de la tasa Selic. Como se trata de un instrumento tradicional de la economía popular, meterse con la libreta siempre significa riesgos. Dilma demostró coraje al disminuir el rendimiento, sin perder el apoyo de la población. A fin de mes, confiado, Guido amenazaba: “Los bancos públicos tienen el 44% del mercado interno. Eso se denomina competencia. Si ellos [bancos privados] miran para otro lado, la competencia se quedará con los clientes”. En septiembre, dando un paso adelante, declaró que los intereses cobrados por los bancos sobre las tarjetas de crédito eran “exorbitantes” e, igualmente, debían bajar. Por fin, el mismo mes, el BC anunciaba que

la tasa media de intereses bancarios en las operaciones con personas físicas se había vuelto el menor “de toda la serie histórica de la institución”. La batalla del *spread* había sido ganada por los desarrollistas.

Animada por la victoria, la presidenta siguió adelante. En septiembre decretó la Medida Provisoria 579 con el objetivo de reformar el marco regulatorio del sector eléctrico y reducir en un 20 por ciento las cuentas de luz, reivindicando la industria para ganar competitividad en relación a lo importado. La medida provisoria modificaba las reglas de juego con respecto a las empresas concesionarias del área. Los contratos que iban a vencer en 2015 y 2017 fueron anticipados para retirar de las tarifas la transferencia de las inversiones antes amortizadas. Uno de los efectos de la medida fue el de provocar un descenso del valor de mercado de las empresas involucradas, lo que provocó pérdidas a los inversores. Según lo señaló el economista Luiz Gonzaga Belluzzo,



Dilma Rousseff, presidenta de Brasil y del Partido de los Trabajadores, habla con su antecesor Lula da Silva durante la campaña para la reelección en San Pablo. 3 de octubre de 2014.

el modelo eléctrico brasileño es financiado por completo. El fondo Skagen (noruego), por ejemplo, tenía una participación por un monto de 1,3 mil millones de reales en Eletrobrás a comienzos del 2012. Después del paquete de medidas, pasó a valer 740 millones de reales (aunque la causa de la caída no haya sido solamente una decisión del gobierno). El Skagen reaccionó a la caída del precio de las acciones que poseía con una declaración bombástica al *Financial Times*: “Vemos eso como una forma de nacionalización de la propiedad, entonces es más o menos lo que vemos en Venezuela y Argentina”, declaró Kristian Falnes, ejecutivo de la empresa.

“  
**La receta para volver al camino correcto sería disminuir los gastos del Estado, reducir el valor de las jubilaciones, recortar los impuestos, reformar las leyes laborales y aumentar las privatizaciones.**  
 ”

La reacción capitalista no se hizo esperar. Los medios respetados por el gran empresariado mundial pronto comenzaron a manifestarse. En diciembre de 2012, una revista británica *The Economist* pide la dimisión de Mantega. El *Financial Times*, posteriormente, publica un artículo de página completa en el que denuncia que Brasil volvía al intervencionismo del pasado, dando una señal para la principal acusación contra la presidenta hasta el final del mandato. Según el periódico, Dilma buscaba “entrometerse en varios sectores, desde la energía hasta las telecomunicaciones, en una mezcla de incentivos y punitivos, con acciones que van desde incentivos tributarios a medidas para forzar a los productores a bajar los precios”. En septiembre, un informe especial de *The Economist* volvió a la carga. Defiende la tesis de que Brasil “echó a perder” lo que fue construido en los años anteriores. La receta para volver al camino correcto sería disminuir los gastos del Estado, reducir el valor de las jubilaciones, recortar los impuestos, reformar las leyes laborales y aumentar las privatizaciones.

En Brasil, los medios también se volverían duros antagonistas de la nueva matriz. Vamos a citar sólo dos ejemplos, entre miles de textos publicados en el período. El abandono del trípode neoliberal (metas de inflación apretadas con altos intereses, superávit primario elevado y una tasa de cambio fluctuante) por parte de Dilma y Mantega había provocado un desorden que debía ser revertido, decía Henrique Meirelles, ex-presidente del BC en la época de Lula (*Folha de S. Paulo*, 12/1/2014). Dilma vendría después de “un largo período de crecimiento y cambios estructurales importantes”, que, sin embargo, “habían creado desequilibrios de oferta y demanda”, escribía Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-ministro de FHC. Para enfrentar la situación, era necesario frenar el consumo y los gastos públicos, porque, de lo contrario, se produciría una escalada inflacionaria (*Folha de S. Paulo*, 27/6/2014). El tono de buena parte de los medios de comunicación locales estaba afinado con los del exterior.

Pero la presión no se restringía a la opinión pública. Lenta, pero sólidamente, se formó un frente burgués único en oposición al desarrollismo de Dilma y Mantega. Según Bresser-Pereira, “el alejamiento de los empresarios industriales del gobierno tuvo lugar a partir del final de 2012”. En octubre de 2013, el asunto pasó a ser público. La periodista Claudia Safatle expone, en la primera página de *Valor* (7/10/2013), la conclusión del Planalto de que las medidas solicitadas por los industriales, como la reducción de los intereses y la exoneración de la nómina, no habían producido el efecto esperado, generando, por el contrario, una desconfianza generalizada entre los empresarios. En una reunión de la Confederación Nacional de la Industria, en diciembre de 2013, donde el ambiente acostumbra ser protocolar, inmediatamente después de que la presidenta salió, un miembro tomó la palabra para explicar “que hemos andado furtivamente en materia de crecimiento y productividad”. En agosto de 2014, el presidente interino de la Federación de Industrias de San Pablo, Benjamin Steinbruch, dueño de la *Companhia Siderúrgica Nacional* y renombrado

empresario “de avanzada”, iría más lejos y afirmarí­a que “sólo un loco invierte en Brasil”.

El aislamiento completo en relación al capital precipitó el fin de la experiencia desarrollista. El lulismo no encontró respuesta a la unificación de la burguesía contra Dilma. Por dos años, la presidenta resistió valientemente las crecientes presiones para prescindir de Mantega y proceder al ajuste recesivo. Pero como no movilizó ningún tipo de apoyo político a esa resistencia (la clase trabajadora no fue ni siquiera avisada de lo que se estaba gestando), el aislamiento del Planalto y del equipo económico fue cada vez mayor, hasta que en la tarde del 27 de noviembre de 2014, por fin, la presidenta cedió y, para sorpresa de quienes habían creído en el discurso de campaña, anunció un cambio neoliberal. La elección de Levy caracterizó la ausencia de un camino propio para superar el obstáculo del bajo crecimiento que se venía registrando desde 2011. El milagro de 2008/2010 no se repetiría y el lulismo adoptaba el programa del adversario. Sin embargo, por razones electorales y, tal vez, por una confianza excesiva en el propio poder, la candidata había prometido preservar el empleo y la renta de los trabajadores, como si fuesen posibles ambas cosas al mismo tiempo. Ante el sentimiento de traición que surgiría, quizá hubiese sido mejor haber perdido las elecciones, dejar que Aécio Neves condujese el ajuste recesivo y, con la fuerza preservada del apoyo popular, impedir que las conquistas igualitarias de la década anterior fuesen barridas por la marea liberal.

El incumplimiento de las promesas abrió el camino para que la oposición tomara las calles, aplicando un rechazo en la legitimidad de la presidenta. La caída de la aprobación de Dilma fue rápida y dramática, como era previsible, pues ya había sucedido con José Sarney y Fernando Henrique Cardoso. La Presidenta lulista cayó de 42 por ciento, en octubre de 2014, a 8 por ciento, en agosto de 2015.

Al divulgar los números, *Folha de S. Paulo* registró que el rechazo generado por Dilma lograba ser mayor que el sentido por Collor en la víspera de la caída, en septiembre de 1992.

En el contexto de amplio desgaste popular de la presidenta, nuevos grupos sociales realizaban movilizaciones en pro del *impeachment* (*juicio político*). La tentativa lulista de responder con la misma moneda fracasó. En la antevíspera de la movilización contra Dilma, hubo un ensayo de unidad de la izquierda para contraponerse al levante derechista, pero la disyuntiva entre defender el mandato constitucional de la presidenta y exigir un cambio de política económica dividió el frente. El Movimiento de los Trabajadores sin Techo, una de las organizaciones capaces de llevar más personas a la calle, no se presentó en el acto porque lo consideraba demasiado oficialista y poco tendiente al cambio. El resultado fue que la izquierda movilizó 41.000 personas en San Pablo el día viernes 13 de marzo de 2015, mientras que la derecha llevó 210.000 a la capital paulista el domingo siguiente. Así lograron la manifestación política más grande de la ciudad desde la campaña de las derechas (sigo los cálculos de presencia realizados por Datafolha en las dos ocasiones). El lulismo perdió la batalla en las calles, a diferencia de lo que había ocurrido en 2005, cuando tuvo lugar el escándalo de las mensualidades. En aquella ocasión, la derecha no consiguió llevar gente a la plaza y los movimientos sociales populares que apoyaban a Lula sí lo lograron.

Las protestas del día 15, que se produjeron en más de 150 municipios, fueron muy expresivas, pero comprendieron especialmente a la clase media. Casi un 70 por ciento de los presentes en la capital paulista tenían una renta familiar mensual superior a cinco salarios mínimos. Sin embargo, debemos destacar que, aunque sea minoritaria, la participación de los electores de la mitad inferior de la pirámide (casi 30 por ciento) es significativa. Aún más, podemos indicar que los sectores de menor renta son arrastrados, quizá por el centro, para constituir un bloque ideológico con la derecha.

La predominancia de la clase media es coherente con el significativo contingente de centro en las manifestaciones del día 15. La posición típica de la clase media es





Cientos de miles de personas marchan por la Avenida Paulista en San Pablo, muchos exigiendo el juicio político de la presidente, Dilma Rousseff, y en contra de las tramas de corrupción en la petrolera estatal Petrobras. 15 de marzo de 2015.

moderar las tendencias cambiantes a la izquierda y conservadores a la derecha. Es coherente, por lo tanto, que, de acuerdo con el *Datafolha*, el 65 por ciento de los presentes en la capital paulista estaba compuesto por gente de centro (37 por ciento), de centro-derecha (22 por ciento) y de centro-izquierda (6 por ciento). Sólo el 25 por ciento representaba la suma de la derecha y la extrema derecha.

La presencia masiva de manifestantes de centro moderó el carácter de la protesta, diluyendo la pauta del *impeachment*. Si es verdad que la mayoría de los presentes apoyaban el juicio político, no fue eso lo que los llevó a la calle. En otras palabras, los segmentos más duros y movilizados, que habían estado al frente de las convocatorias, atrajeron un público menos comprometido y definido. Con eso, las protestas ganaron

amplitud, pero perdieron nitidez. Al investigar las motivaciones ideológicas involucradas en aquellas manifestaciones, me di cuenta de que había una vaga visión centrista que colocaba la ineficiencia en la salud y en la educación como algo que podría ser resuelto tanto con inversiones públicas como combatiendo la corrupción. Un punto de vista, por lo tanto, capaz de inclinarse tanto para la izquierda como para la derecha.

El mismo método disperso y posmaterialista vino ahora a engrosar la manifestación impulsada por la derecha. Pocas palabras de orden, muchas familias de paseo y las *selfies* con policías militares caracterizaron el 15 de marzo de 2015.

El posmaterialismo se puede caracterizar como un conjunto de valores relacionados al bienestar subjetivo y a la calidad de vida,

por oposición a aquellos centrados en la seguridad económica y física, de acuerdo con el creador del concepto, el científico político Ronald Inglehart. “La ascensión de la sociedad posindustrial llevó a un gran proceso de cambio cultural: en lugar de racionalización, centralización y burocratización, la nueva tendencia es enfatizar cada vez más la autonomía individual y los valores de autoexpresión”, afirma Inglehart. Significa que, para aquellos que habían superado los problemas relacionados con la inseguridad material, el foco pasa a asuntos como el ambiente, la libertad y la honestidad. Por eso, para los posmaterialistas, el tema de la *nueva política* es más relevante que el de los programas sociales. La falta de transparencia de Dilma en la campaña los empujó aún más para la derecha; y esto es decisivo porque, aislada, tal vez la derecha no sea capaz de representar una alternativa sólida al lulismo. En compensación, había menos disposición para luchar contra el juicio político, como pregona la derecha, que para protestar con un supuesto atraso encarnado en el gobierno de Dilma y del PT. Los sectores de la sociedad que se consideraban modernos querían confrontar a un Estado y sus dirigentes, vistos como envejecidos y corruptos. El centro que reapareció en las manifestaciones de 2015 quiere, como el de 2013, quitar los hábitos y desvíos caquéticos del Estado, más que derribar a una presidenta. Las banderas típicas de la derecha (el miedo al comunismo, el llamado a los militares, el deseo de castigar a los *petralhas*) estuvieron presentes, pero fueron minoritarias el 15 de marzo de 2015.

En la segunda y tercera movilizaciones, con menor presencia de público, la derecha apareció más. En San Pablo, donde *Datafolha* ofrece mediciones científicas y comparables, en relación al 15 de marzo de 2015, se contabilizó la mitad de las personas en abril y poco más de la mitad en agosto. Una hipótesis para explicar la disminución está justamente en la disminución del electorado post-materialista. Es probable que parte de los manifestantes no encontrara sentido en repetir en abril el paseo del mes anterior, ya que no estaba interesada en lograr un *crecimiento* para el *impeachment*. Coherente

con esa hipótesis, en las manifestaciones siguientes se contabilizaron menos jóvenes, que tienden más al posmaterialismo. Los datos del *Datafolha* mostraron que en marzo la proporción de los presentes con más de 50 años se reducía a 21 por ciento; en abril y agosto saltó a 41 y 40 por ciento. La proporción de jóvenes y jóvenes adultos, por otro lado, cayó de 43 a 30 por ciento. Dicha reducción de jóvenes se condice con la posición de Marina Silva —la líder principal del segmento posmaterialista— contra el juicio político.

“  
**La falta de transparencia de Dilma en la campaña los empujó aún más para la derecha; y esto es decisivo porque, aislada, tal vez la derecha no sea capaz de representar una alternativa sólida al lulismo.**  
 ”

Con la disminución posmaterialista, las posturas conservadoras quedaron más evidentes. De acuerdo con el análisis llevado a cabo por el científico político Jairo Pimentel Jr., el domingo 12 de abril de 2015, en la capital paulista, nada menos que 39 por ciento de los manifestantes bogaban por la intervención militar para derrocar a Dilma. El investigador detectó una asociación entre la elección por la intervención militar y la menor renta y escolaridad. Ese número abrumador fue, en parte, corroborado por otro muestreo en la misma fecha y lugar, coordinado por los profesores Pablo Ortellado, de la USP, y Esther Solano, de la Unifesp. Estos descubrieron un 64 por ciento de concordancia con la frase “el PT quiere implantar un régimen comunista en Brasil”. Conviene obtener indicios nacionales y en diferentes circunstancias para formular una interpretación acabada, pero al confirmar esos datos, las posiciones propiamente derechistas estarían ganando un espacio inédito en la sociedad tal vez desde 1964.

Pero si, por un lado, la derecha creció, por otro, se aisló; esto quizá explica el enfriamiento de la movilización en favor del *impeachment* del último trimestre de

2015. Incluso así, el lulismo fue incapaz de movilizar a los trabajadores y las capas populares en general. La dualidad *defensa del gobierno versus salida de Levy*, detectada en marzo de 2015, se eternizó e impidió la construcción del soñado frente amplio, que acabó por dividirse en el *Frente Brasil Popular*, en el que el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra tuvo un papel preponderante, pero centrado en impedir el impeachment, y el *Pueblo sin Miedo*, en donde predomina el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, más centrado en la revocación del ajuste. Entre una y otra, Lula, cuyo liderazgo directo a la hora de la política grande se torna crucial, se manifestó de manera ambigua, personificando o la defensa del ajuste y del mandato de Dilma, o la crítica a la política económica y la conducción gubernamental de la sucesora.

“

**A medida que Dilma aceleraba los daños que había prometido evitar, se hacía más difícil para Lula defenderla. Pero tampoco podía alejarse de ella, porque sería peor verla caer y que el rastro de la mentira y de la incompetencia quedase marcado a fuego sobre la experiencia lulista.**

”

En otras palabras, al momento del ajuste, la fragilidad ideológica del lulismo salió a la luz. Lula no lograba responder las preguntas angustiantes del momento. Unas investigaciones cualitativas llevadas a cabo en las vísperas de la elección de 2014 habían mostrado que el voto por Dilma fue decidido en la recta final, movido por el miedo de que la victoria del oponente acarrearía pérdidas en lo ganado durante el decenio lulista. Con la desaceleración económica en curso desde 2011, la percepción de empeoramiento se generalizaba, aunque las estadísticas no registrasen el problema. A medida que Dilma aceleraba los daños que había prometido evitar, se hacía más difícil para Lula defenderla. Pero tampoco podía alejarse de ella, porque sería peor

verla caer y que el rastro de la mentira y de la incompetencia quedase marcado a fuego sobre la experiencia lulista.

La perplejidad ideológica del electorado potencializó los efectos políticos de la inagotable fuente de acusaciones en que se convirtió la Operación *Lava Jato*, cuya presencia masiva en los medios se convirtió en un tercer factor que fragilizó al lulismo. En condiciones materiales favorables, el tema de la corrupción afecta menos al público de bajos ingresos. Pero las dificultades de supervivencia potencializan la bronca que producen las noticias sobre corrupción.

Cuando la investigación con sede en Curitiba se hizo pública en marzo de 2014, se convirtió en una serie de golpes bajos al PT. En este caso, perpetrados por una especie de Partido de la Justicia (PJ) con fuertes alianzas mediáticas, un fenómeno típicamente moderno sin correspondencia con viejas fórmulas que tienden a reducir todo a un juego de los partidos tradicionales. El PT parece no haber percibido que el PJ actúa con autonomía, aunque contribuya, objetivamente, al avance de la oposición. Debemos exceptuar, no obstante el desequilibrio político que tiende a producir, que la *Lava Jato* tiene un sentido general republicano y que la reducción de la impunidad es una aspiración de la sociedad brasileña, que atraviesa diversos segmentos ideológicos. En esa línea, los encarcelamientos que se llevaron a cabo, del líder del gobierno en el Senado, Delcídio do Amaral, y de uno de los banqueros más importantes del país, André Esteves, en una grabación más que explosiva, reforzaron significativamente la imagen positiva de la operación.

Pero, contempladas desde un ángulo de disputa por el poder, las baterías del PJ tienden a dirigirse mucho más en una determinada dirección que en otra, lo que puede ayudar a producir un desequilibrio democrático importante. Si retrocedemos en el tiempo, veremos que sólo cuatro meses después del primer encarcelamiento de José Dirceu, que se llevó a cabo en la simbólica fecha de la proclamación de la República

de 2013, condenado por corrupción activa en el proceso de las mensualidades, una serie de detenciones ordenadas desde la capital del Estado de Paraná comenzaba a recolocar al PT en el centro de un escándalo político-mediático mucho más resonante. Considerados ambos casos, el PT pasará una década sistemáticamente expuesto como el partido más corrupto del país. A los otros dos pilares del sistema partidario brasileño, PMDB y PSDB, no les sucedió nada similar. Aunque el PMDB también haya recibido golpes, en especial el diputado Eduardo Cunha, es evidente que existe una intención de probar que el PT dirigía el esquema, mientras que el PSDB pasa incólume. El foco del PJ sobre el PT todavía requiere una explicación, porque las evidencias sugieren un *modus operandi* que involucra por igual a los partidos más relevantes. Hay quienes se preguntan, con precisión, por qué los nombres del PSDB que aparecen en el *Petrobrás* (el caso de corrupción de Petrobras) no son investigados y caen en el olvido mientras que los petistas son rápidamente encarcelados, acusados y condenados.

Simultáneamente, parece que al PT se le escapó que las respuestas que se darán en el caso de Petrobras implican luchar con adversarios completamente diferentes de los anteriores. Aunque se puedan establecer continuidades entre el caso de las mensualidades y el de Petrobrás, en la operación *Lava Jato* no estamos, como en los escándalos habituales, delante de un patrón "político que filtra un dossier contra político". Como el PJ no disputa elecciones, es enemigo de las reglas tradicionales. Mientras que en el padrón tradicional es frecuente una motivación electoral, en la versión del procurador Deltan Dallagnol, designado para coordinar la fuerza-tarea del Ministerio Público Federal en la *Lava Jato*, la investigación paranaense habría comenzado sólo para desarticular cuatro organizaciones que tenían como objetivo el lavado de dinero. De acuerdo con Dallagnol, fue por casualidad, en medio de un monitoreo telefónico, que los investigadores descubrieron que Alberto Youssef, que compraba dólares en el mercado paralelo, había donado un automóvil de alta gama al

ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa.

La coincidencia habría determinado el encarcelamiento de Costa, lo que llevó el escándalo para el sector estatal del petróleo. Gracias a las prisiones preventivas y a las delaciones premiadas, el método produjo un gran volumen de información. En poco menos de un año y medio, la *Lava Jato* aprehendió a 96 personas que, asustadas por lo que Dallagnol llama el efecto Marcos Valério, condenado a cuarenta años de prisión por el caso de las mensualidades, resolvieron, por lo menos algunas, cooperar. Costa, por ejemplo, después de cinco meses (no continuos) en la cárcel, decidió hacer una delación premiada. Su testimonio fue decisivo, porque reveló cómo funcionaba lo que el juez Sergio Moro —a cargo del caso en la 13ª Vara Criminal de Curitiba y que parece ser el verdadero líder del PJ— llama *sistema de corrupción*.

“  
**Moro percibe el combate al sistema corrupto como una guerra que enfrenta, por un lado, jóvenes y profesionales honestos del área jurídica y, por el otro lado, viejos políticos involucrados hasta el cuello con coimas y desvíos de todo tipo.**  
 ”

Criticado por violar los derechos individuales, Moro describe con entusiasmo, en un artículo que escribió sobre la Operación *Mani Pulite* que ocurrió en Italia a comienzos de los 90, la técnica de atrapar y forzar al preso a colaborar con la Justicia por medio de una prolongada prisión preventiva. El texto redactado por el juez una década antes de deflagrar la *Lava Jato* expone clara y sorprendentemente lo que ocurriría en Brasil. Uno de los elementos que más llama la atención es la conciencia por parte del juez en cuanto del papel jugado por los medios de comunicación. Moro percibe el combate al sistema corrupto como una guerra que enfrenta, por un lado, jóvenes y profesionales honestos del área jurídica y, por el otro lado,

viejos políticos involucrados hasta el cuello con coimas y desvíos de todo tipo. A medida que se ven presionados por el avance de las revelaciones obtenidas por los jóvenes, los viejos líderes reaccionan, tratando de echar por tierra y, sobre todo, de deslegitimar los procedimientos de investigación. En este punto, la única salvación sería una alianza exitosa del Partido de la Justicia con una prensa amiga que, si está bien hecha, puede convertirse en la clave del éxito.

Dice Moro: “Los responsables de la operación *Mani Pulite* utilizaron la prensa durante mucho tiempo. En efecto: usaron la prensa para disgusto de los líderes del Partido Socialista Italiano. La investigación cubría como una llovizna. En cuanto alguien caía preso, los detalles de su confesión eran dirigidos al *L'Espresso*, *La Repubblica* y otros periódicos y revistas simpatizantes”. Cualquier semejanza con Brasil no parece ser mera coincidencia. Existe un aspecto abiertamente maquiavélico en el raciocinio de Moro, la priorización de los fines. El uso rutinario de medios extrajurídicos, como el papel de los medios de comunicación aliados, una detención prolongada, el aislamiento de los presos y hasta la difusión de informaciones falsas –por ejemplo, la de que determinado preso habría acordado hablar, incluso siendo una mentira, para que los otros, aislados, se decidan a contar lo que saben, está justificado por el fin a ser alcanzado: el desmantelamiento del sistema corrupto que sólo tiene lugar si los participantes del esquema resuelven delatar. En otras palabras, el conjunto de la operación se concibe como lucha y los movimientos del PJ son calculados, aunque este partido no dispute el poder, para vencer el sistema corrupto. Una vez leído el texto de Moro, cuesta creer que los papeles que incriminaban al presidente de la Cámara hayan aparecido justo cuando iba a encaminar el pedido de *impeachment* para Rousseff.

La audacia, y al mismo tiempo el cálculo de los jóvenes procuradores y del juez Moro fueron evidentes en noviembre de 2014, cuando resolvieron apresar a cerca de treinta empresarios o altos ejecutivos de las principales empresas contratistas del país. Como si fuese poco, siete meses después

detuvieron al dueño de la constructora más grande de Brasil, la Odebrecht, uno de los conglomerados empresariales más importantes del período lulista. Da la impresión de que el carácter espectacular de los hechos siempre es calculado para preparar el terreno de lo que vendrá. En el caso de la prisión y la condena de símbolos del PT, ¿cómo acusar a las investigaciones de clasistas, si comenzaron por meter en cana a los plutócratas?

“  
**El uso rutinario de medios extrajurídicos, como el papel de los medios de comunicación aliados, una detención prolongada, el aislamiento de los presos y hasta la difusión de informaciones falsas, está justificado por el fin a ser alcanzado: el desmantelamiento del sistema corrupto que sólo tiene lugar si los participantes del esquema resuelven delatar.**  
 ”

En el vértigo de las revelaciones casi diarias a lo largo de veinte meses, la cantidad de dinero desviado es enorme. En 2015, Petrobras contabilizó 6,2 mil millones de reales perdidos, relacionados con proyectos cerrados entre 2004 y 2012. Hasta octubre pasado, la *Lava Jato* había logrado acuerdos para recuperar más de 2 mil millones de esos reales para los cofres públicos. No sorprende que los niños de Paraná se hayan convertido en héroes de la clase media y, quizá, de las áreas populares.

En las delaciones premiadas de Alberto Youssef, el que manejaba los dólares del ex gerente de Petrobras, Pedro Barusco, y del empresario Augusto Mendonça Neto, ellos afirman haber transferido al PT dinero que provenía de las coimas abonadas por sobreprecio de obras realizadas para la estatal. Por eso, en abril de 2015, Moro ordenó la prisión para el tesorero petista, João Vaccari Neto. Aunque se hayan arrestado los miembros de otras asociaciones, como los ex diputados Pedro Corrêa, del Partido



Progresista de Pernambuco, y Luiz Argôlo, del Solidaridad de Bahía, ninguno de ellos tiene una centralidad organizativa del encargado oficial de las finanzas del PT. Además, los parlamentarios pertenecen a partidos de menor porte y cuya imagen nunca pasó por la defensa intransigente de la ética.

Vaccari fue condenado, en tiempo record, por Moro, a quince años de prisión. Acusaciones: lavado de dinero, asociación criminal y corrupción. Moro afirma, en la sentencia, que tiene documentos que demostrarían la veracidad de las afirmaciones hechas por los delatores; es decir, comprobantes de los pagos al PT, en los valores que ellos citan en las delaciones.

De acuerdo con la defensa del ex-tesorero, no habría prueba material de que Vaccari supiese que el dinero provenía de las coimas y las acusaciones de personas interesadas en librarse de penas mayores no serían elementos conclusivos para la condena. Otra vez se establece, como en el caso de las mensualidades, la oposición entre la multiplicidad de evidencias indirectas, basadas en declaraciones, y el alegato de la falta de pruebas materiales. Ciertamente Vaccari va a apelar y la opinión pública tendrá la oportunidad de verificar para qué lado se inclinarán los jueces de instancias superiores. Sin embargo, delante del tribunal de la opinión, Vaccari está de antemano condenado, porque predomina el clima difuso de que las delaciones proceden.

Lo mismo sucede en relación a José Dirceu, otro símbolo del partido. Durante la mañana del lunes 3 de agosto de 2015, agentes de la Policía Federal, al mando de Moro, detuvieron al líder petista por segunda vez en menos de dos años. Un mes y medio después de la detención, el juez acató la denuncia formulada por el Ministerio Público Federal contra el ex ministro, según la cual parte de las coimas abonadas por la empresa *Engevix Engenharia* habría ido a parar al bolsillo de Dirceu. En uno de los famosos vaciamientos previstos en el artículo de Moro de 2004, meses antes la prensa había publicado que *JD Assessoria e Consultoria* había declarado ante la Hacienda Federal haber recibido 29 millones

de reales en ocho años de prestaciones de servicios (2006–2013). Parte del monto sería originario de empresas investigadas en la *Lava Jato* y las delaciones premiadas habrían afirmado una transferencia de dinero desviado de Petrobras al ex presidente del PT. Los abogados de Dirceu argumentan que el reo “fue colocado en este papel [...] sin que ninguna investigación o elemento de prueba verdaderamente autónomo a las declaraciones de los delatores fuese investigado”.

Pero el apoyo actual que la *Lava Jato* viene recibiendo por parte de la Procuraduría General de la República y del Supremo Tribunal Federal legitima las acusaciones a los ojos del público. Por más que haya una posibilidad de apelar y que las instancias superiores se pronuncien en el futuro en relación a los alegatos de los abogados de la defensa, pudiendo hasta modificar las decisiones de Moro, desde el punto de vista de la opinión pública hay una condena anticipada. Del otro lado del cuadrilátero, el silencio del lulismo muestra una creciente incapacidad de luchar contra la marea del caso *petróleo*.

“  
**Del otro lado del cuadrilátero,  
 el silencio del lulismo muestra  
 una creciente incapacidad de  
 luchar contra la marea del caso  
 petróleo.**  
 ”

Desde la perspectiva popular, la asociación intuitiva entre el desvío de dinero público y la caída en el ritmo de actividad económica puede generar un efecto devastador en las urnas en 2016 y 2018. En la disputa por la Prefectura de San Pablo, centro de la reacción antipetista, Fernando Haddad apareció, en la investigación de *Datafolha* del 29 de octubre último, en cuarto lugar en las intenciones de voto, con apenas 12 por ciento. El apoyo al PT en la capital de San Pablo, que había llegado el 35 por ciento en 2012, cayó a 10 por ciento, empatando por primera vez con el PSDB. El desgaste evidente de la sigla en la ciudad más grande del país, puede anticipar un escenario de

la carrera presidencial. En junio, el instituto había detectado que, también en el plano nacional, el PT despertaba 11 por ciento de las preferencias, quedando de manera inédita en empate técnico con el PSDB, que había obtenido el 9 por ciento, también a nivel nacional.

Lula mantenía, hasta nuevo aviso, un capital electoral más grande que el partido. En la investigación de la intención de voto divulgada el 27 de octubre, el ex presidente registraba 22 por ciento, contra 32 para Aécio y 21 por ciento para Marina. Lula preserva la condición de disputa advenida del liderazgo personal indiscutible. El relevamiento realizado por *Ibope* entre el 17 y el 21 de octubre detectó que el ex presidente poseía el electorado cautivo más grande de los tres: 23 por ciento dijeron que votarían por él con seguridad, contra 15 para Aécio y 11 por ciento para Marina. Tal vez sea correcto imaginar que esa es la reserva profunda del lulismo, que en un lance jocoso el ex mandatario llamó volumen residual: los que creen en la capacidad individual del líder, aún descreyendo del partido y de los indicados por él, para resolver la situación.

“

**La interrupción del mandato de Dilma agravaría el riesgo de reducción expresiva del lulismo en las urnas, porque tal vez fijaría en el electorado el doble estigma de la crisis económica y la connivencia con la corrupción.**

”

Sucede que la ofensiva de la *Lava Jato* sobre el *condottiere* del lulismo no da señales de enfriarse. Si el rechazo (los que no votarían por él de ninguna manera) saltó del 33 por ciento en mayo de 2014, a 55 por ciento -según *Ibope*-, dificultando las perspectivas de victoria en una segunda vuelta, ¿qué sucederá si persiste la combinación de acusaciones personales y las dificultades económicas? Desde el punto de vista histórico, esa es una pregunta decisiva, porque una derrota electoral no sería grave, mientras las bases lulistas sigan firmes el partido que las representa permanezca organizado y la distancia en el número de votos

no sea mayor que aquella en relación al PSDB en 2002, al final de la elección del cambio.

La interrupción del mandato de Dilma agravaría el riesgo de reducción expresiva del lulismo en las urnas, porque tal vez fijaría en el electorado el doble estigma de la crisis económica y la connivencia con la corrupción. Desde ese punto de vista, la elección de Eduardo Cunha como presidente de la Cámara, el 1° de febrero de 2015, fue el cuarto golpe, casi fatal, que recibió el lulismo.

Cunha hizo aparecer en el escenario la guillotina del *impeachment*, que sería el golpe literalmente más potente de todos. Se sabe que por poco no accionó el mecanismo, con consecuencias que serían graves también para la democracia que se reestableció en 1985.

Lejos del ámbito político, los militares le evitaron a Brasil el fantasma de otra dictadura, pero una parte significativa del Congreso y de la opinión pública flirteó con el golpe certero del *impeachment*. Aunque se auto justifiquen por la idea de que Dilma habría mentido en la campaña, habría realizado una gestión temeraria y solapado la causa Petrobras, nunca surgió ninguna prueba razonable de que la mandataria haya cometido un crimen de responsabilidad ni común, las dos razones constitucionales para alejarla del cargo. Las figuras libres de sospecha como el ex presidente Fernando Henrique Cardoso; el ex presidente del Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto; y hasta el gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin (*PSDB*), declararon públicamente que no veían motivos jurídicos para el *impeachment*. A pesar de eso, la bancada del PSDB en la Cámara asumió la vanguardia de la lucha por dicho proceso. La simpatía, implícita o explícita, de parte de los medios de comunicación por la tesis ayuda a explicar por qué los tucanes (del PSDB), en la práctica, liberaron a sus diputados para tomar la bandera antidemocrática, aunque el partido no quiera apoyar una propuesta de carácter oficial.

Pero el verdadero artífice del impedimento fue Cunha. Desde 1992, cuando fue aprobada la apertura del proceso de *impeachment* contra



Diversos movimientos sociales protestan contra el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, frente al Congreso Nacional en Brasilia. 13 de noviembre de 2015.

Fernando Collor, los presidentes aprendieron que no hay estabilidad sin el apoyo de los tres quintos de diputados, algo así como 300 parlamentarios. Fuera de esa franja de seguridad, los jefes del Ejecutivo quedan vulnerables a infinitos chantajes que acaban por desbaratar cualquier plan del gobierno. A partir de la prueba de que el apoyo a Dilma estaba reducido a menos de la mitad de lo necesario, Cunha, formó en el Legislativo el equivalente al frente único antidesarrollista en la economía. En su calidad de segundo en la línea sucesoria presidencial y con el poder discrecional para considerar un pedido de *impeachment* como admisible en cualquier momento, el *malvado favorito* encontró terreno fértil para desestabilizar a la mandataria. La ascensión de Cunha está igualmente ligada a la osadía insostenible de Dilma en el primer mandato. La presidenta se metió en problemas con el parlamento como lo hizo en el campo económico. Los motivos

eran buenos, pero el procedimiento no seguía el protocolo lulista de no radicalizar, sin substituirlo por la movilización de la sociedad.

Como si estuviese decidida a republicanizar el Estado a la fuerza, la sucesora de Lula ganó varias peleas simultáneas sin estructurar nunca el apoyo a la posición jacobina que asumía. Bastaba con que surgiera alguna denuncia de irregularidad para que la escoba presidencial realizase la debida limpieza, aumentando el grupo de descontentos. A la clase media, reflexiva y que refleja a la prensa, le encantaba, pero de a poco la base parlamentaria del gobierno se vio despedazada. En cada golpe de la Robespierre del Planalto, Cunha, versión brasileña de Frank Underwood de *House of Cards*, recogía adeptos para la venganza soñada desde el comienzo de la era dilmista, cuando se vio alejado del control directo *Furnas Centrais Elétricas*.

La serie de movimientos operados por Dilma es inolvidable. En julio de 2011, cuando apareció la denuncia de pagos de coimas a las cúpula del Ministerio de Transporte, decidió alejar al ministro Alfredo Nascimento, senador por Amazonas, cuyo hijo había estado involucrado en el esquema. A cambio, el Partido de la República en la Cámara, con cerca de cuarenta diputados en ese entonces, se alejó de la base y se declaró independiente. Más tarde, los siete senadores del PR se colocaron en oposición al gobierno. En la secuencia, se limpiaron otros cuatro ministerios. En todos ellos, se vieron afectados los nervios sensibles del Parlamento. En agosto, el ministro de Agricultura, Wagner Rossi (PMDB de San Pablo), ligado a Michel Temer, fue defenestrado por haber recibido supuestamente un dinero ilícito. En septiembre fue el turno de Pedro Novais, de Turismo, diputado federal por el PMDB de Maranhão, ligado a José Sarney, que cayó después de que la Policía Federal descubriera a 36 funcionarios del Ministerio en una operación de desvío de recursos públicos e irregularidades en los convenios. En febrero de 2012, se derrumbó Mário Negromonte, diputado federal por el Partido Progresista de Bahía designado para el Ministerio de las Ciudades. En ese caso, las acusaciones versaban sobre soborno dentro del propio gremio hasta fraude en el proyecto de transporte para la Copa del Mundo en Cuiabá.

Las fricciones no se limitaron al centro y a la derecha. En junio de 2011 caía el poderoso petista Antonio Palocci de la Casa Civil, acusado de enriquecimiento ilícito. Después, en octubre, sería el turno de Orlando Silva, el hombre del PCdoB que ocupaba el cargo de ministro de deportes, acusado de desvío de dinero del programa del ministerio. Finalmente, en diciembre, fue la hora de Carlos Lupi, el ministro pedetista de Trabajo, que enfrentaba desde hacía meses unas acusaciones relacionadas a un supuesto esquema de coimas para la liberación de transferencia a las ONG.

Cuando Cunha logró ser escogido como líder de la bancada del PMDB en la Cámara, en febrero de 2013, había, por lo tanto, una

buena cantidad de resentidos con el estilo presidencial, empezando por el propio líder *peemedebista*.

A propósito, la desavenencia entre él y Dilma databa de años. Consta que en 2007, cuando la ex ministra de Minería y Energía ocupaba el cargo de jefa de la Casa Civil, habían tenido un entrevero relacionado con Furnas. Por el alto valor de los contratos en cuestión, el sector energético es blanco privilegiado de los políticos, la joya de la corona del sistema Eletrobras administrada nada menos que diecisiete hidroeléctricas, por donde pasa el 40 por ciento de la energía consumida en el territorio nacional. La empresa con sede en Botafogo tuvo una receta operativa líquida superior a 6 mil millones de reales en 2009 y el fondo de pensión Real Grandeza, de los funcionarios, administraba otros 6 mil millones de reales en 2008. De acuerdo con algunas versiones, el escándalo de las mensualidades habría comenzado allá, en realidad, donde el ex diputado Roberto Jefferson (PTB-RJ) tenía intereses importantes.

“

**Por el alto valor de los contratos en cuestión, el sector energético es blanco privilegiado de los políticos, la joya de la corona del sistema Eletrobras administra diecisiete hidroeléctricas, por donde pasa el 40 por ciento de la energía consumida en el territorio nacional.**

”

Al comienzo del segundo mandato de Lula, Cunha, en su calidad de exponente de la prorrogación de la Contribución Provisional sobre las Transacciones Financieras en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara, habría amenazado con dividir la recaudación de la misma con los Estados y los municipios para forzar al presidente de la República a entregarle el control de la ambicionada estatal. Dice la leyenda que, entonces, a pesar del disgusto de Dilma, que siempre intentó preservar el sector energético, Lula finalmente nombró a Luiz Paulo Conde,

excalde de Río, siguiendo indicaciones de Cunha. Cuando Conde se enfermó a mediados de 2008, fue substituido por otro protegido del parlamentario carioca.

El peso que Cunha comenzaba a tener en las decisiones nacionales fue denunciado por el exministro Ciro Gomes, cuando era diputado, en los idus de 2009. “Esta Casa está repitiendo cosas, que no son verdad y tal vez nos afecten a todos, hasta la propia honradez de esta Legislatura. No puede ser que todo lo relevante, lo importante, todas las cuestiones centrales de la República sean ahora objeto de deliberación prácticamente unipersonal de un único líder entre nosotros, el eminente diputado Eduardo Cunha, porque el PT decidió someterse a la voluntad de Su Excelencia, quienquiera que sea”, afirmó el político de Ceará.

## CONCLUSIÓN

-

El lulismo comenzará el 2016 con respiración asistida pero con vida. Aunque tenga los signos vitales en pronóstico reservado, no logró elaborar soluciones para los problemas cruciales que lo destruyeron en 2015. ¿Cómo salir de la recesión y retomar el crecimiento compatible con la distribución de la renta rooseveltiana, aunque diluida, cuando la burguesía parece inclinarse por soluciones liberales? ¿De qué manera explicar el escándalo de Petrobras y mostrar que se tomaron recaudos en relación a la responsabilidad de los petistas involucrados? ¿Cómo reorganizar una base parlamentaria amplia o suficiente para sustentar con estabilidad los tres años que restan a Dilma después de que el PMDB divulgara su adhesión a la plataforma neoliberal? ¿Cómo articular la narrativa ideológica que explique los desórdenes de 2015 y logre dar legitimidad al gobierno de Dilma?

Es temprano para afirmar que la falta de orientación lulista corresponde al agotamiento del proyecto, porque incluso no hay otro sobre la mesa, a no ser el neoliberal. Pero, mientras la crisis no se resuelva, el proyecto rooseveltiano queda suspendido. Si el índice

de Gini, que mide la desigualdad, cayó anualmente de 0,54 en 2004 a 0,49 en 2014, se estima que no lo haga en 2015. Frente a un posible colapso del lulismo, con un sorprendente apoyo del PMDB, que se supone es de centro, se prepara un programa antirrooseveltiano que puede ser sintetizado en la frase “la Constitución no entra en el presupuesto”. Sin la traba puesta por el lulismo, el ciclo propuesto puede terminar en una ronda de pérdida de derechos, como anticipó la Cámara, en abril, con la aprobación de la tercerización de las actividades de las empresas.

Debemos resaltar que para que haya continuidad en el proceso rooseveltiano no sería necesario que el PT permanezca en el gobierno, pero sí debe mantenerse fuerte electoralmente en caso de una derrota. En Estados Unidos, los demócratas perdieron las elecciones del 1952 y 1956, y no por eso hubo una reversión del *New Deal*. “Después de la victoria desconcertante de Harry Truman en 1948, el liderazgo del Partido Republicano se resignó con la idea de que el *New Deal* había llegado para quedarse y, por una razón de autopreservación política, dejó de intentar llevar el reloj a la década del 20”, explica Paul Krugman. Fue necesario que la hegemonía neoliberal se impusiese para dar vuelta el disco.

En Brasil, el casi colapso de 2015 mostró que el ciclo rooseveltiano tal vez no pueda completarse en circunstancias globales tan adversas. Si en 2016 el lulismo no sale del coma al que fue inducido, la experiencia 2003–2014 podrá quedar sólo como un capítulo más de la modernización conservadora brasileña, que termina siempre por actualizar la desintegración y la inorganicidad que heredamos de nuestra educación ●

